JUZGADO SEGUNDO CIVIL ORAL MUNICIPAL DE SINCELEJO.

Dieciocho (18) de diciembre de Dos Mil Veinte (2020).

Informo al señor Juez, que la anterior demanda proveniente de la oficina Judicial de esta ciudad, en reparto verificado en esa misma oficina el conocimiento le correspondió a este Juzgado

70-001-40-03-002-2020-00390-00.

A su despacho.

Libro Radicador No. 1 de 2020.

Radicado bajo el No. 2020-00390-00.

Folio No. 390

**LINA MARIA HERAZO OLIVERO
SECRETARIA.**

JUZGADO SEGUNDO CIVIL ORAL MUNICIPAL.

Sincelejo, Sucre, dieciocho (18) de diciembre del 2020.

Visto el anterior informe de la Secretaria, se ordena:

Aprehéndase el conocimiento de la presente demanda, radíquese en el libro respectivo y vuelva al despacho para proveer.

CÚMPLASE

**RICARDO JULIO RICARDO MONTALVO
JUEZ**

JUZGADO SEGUNDO CIVIL ORAL MUNICIPAL DE SINCELEJO.

Siete (07) de Mayo de Dos Mil Veintiuno (2021).

Responsabilidad Civil Contractual.

Radicado No. 70-001-40-03-002-2020-00390-00.

Por cuanto la anterior demanda verbal de RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL, impetrada por NELLY GONZALEZ NAVARRO, a través de Apoderada Judicial, contra la sociedad BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A, identificada con el NIT No.800240882-0, representada legalmente por GUZMAN ALDANA HERNAN FELIPE y BANCO BBVA COLOMBIA S.A., identificada con NIT No.860.003.020-1 representada legalmente por el Dr. JORGE ALBERTO HERNANDEZ MERINO, con fundamento en que la primera de ella declare el siniestro de la Póliza Seguro De Vida De Grupo Deudores No.02-227-0000032395, que ampara el crédito No.0013-0158-00-9615168653, adquirido por la actora, con fundamento en que le fuera declarada incapacidad total y permanente, con motivo de haber sido presentada en legal forma y por contar con los requisitos legales se accederá a ello.

Por otro lado, advierte la Judicatura desde un principio, según se desprende de una lectura somera del libelo y más específicamente de sus anexos, que la actora percibe mesada pensional reconocida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de la vocera y administradora de sus recursos, Fiduciaria la Previsora FIDUPREVISORA S.A. según Resolución No. 0495 del 26 de diciembre de 2019, infiriéndose de esta manera que no se halla en la inopia o insolvencia económica que argüye para sufragar los gastos originados en esta litispendencia, ahora bien, deviene de lo extractado precedentemente que, la aquí demandante cuenta con un ingreso económico bastanteado en \$4.708.584 de pesos, sin los descuentos de ley, y ello hace que no se encuentre en estado de carencia económica manifestado en el libelo para que sea beneficiaria del Amparo de Pobreza, institución que fue creada precisamente para los usuarios del servicio público de justicia que verdaderamente carecieran de recursos económicos, para solventar los gastos acaecidos en un pleito.

En concordancia, la Honorable Corte Constitucional en **Sentencia Tutelar T-339 de Agosto Veintidós (22) de dos mil dieciocho (2018), M.P. Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ**, al referirse a los presupuestos generales del amparo de pobreza, reseñó:

"(...) El propósito del amparo de pobreza no es otro distinto al interés de asegurar que todas las personas puedan acceder a la administración de justicia en igualdad de condiciones y que, por ende, puedan ejercer los derechos de defensa o contradicción, sin que exista distinción en razón de su situación socioeconómica.(...) Bajo este entendido, el amparo de pobreza ha sido catalogado como "una medida correctiva y equilibrante, (...) dentro del marco de la constitución y la ley" que hace posible "el acceso de todos a la justicia"; "asegurar que la situación de incapacidad económica para sufragar [los gastos] no se traduzca en una barrera de acceso a la justicia"; que "el derecho esté del lado de quien tenga la razón y no de quien esté en capacidad económica de sobrellevar el proceso" y, en últimas, facilitar que las personas cuenten "con el apoyo del aparato estatal.

Para cumplir con la anterior finalidad y asegurar su carácter excepcional, el Legislador ha desarrollado los presupuestos mínimos para determinar su procedencia, los cuales están consignados en los artículos 151 y subsiguientes del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012-. Allí, la normativa establece que "se concederá el amparo de pobreza a la persona que no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes

por ley debe alimentos, salvo cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso a título oneroso”(art. 151). Cuando esto suceda, precisa la norma que “el amparado (...) no estará obligado a prestar cauciones procesales ni a pagar expensas, honorarios de auxiliares de la justicia u otros gastos de la actuación, y no será condenado en costas (Art. 154, inciso primero).

Adicionalmente, indica que “el amparo podrá solicitarse por el presunto demandante antes de la presentación de la demanda, o por cualquiera de las partes durante el curso del proceso”. Y que “el solicitante deberá afirmar bajo juramento que se encuentra en las condiciones previstas en el artículo precedente, y si se trata de demandante que actúe por medio de apoderado, deberá formular al mismo tiempo la demanda en escrito separado (Art. 152). (...)

De la descripción de las normas citadas y de la aplicación que de las mismas ha efectuado esta Corporación, es posible concluir que, para el reconocimiento del amparo de pobreza, deben cumplirse, en todos los casos, dos presupuestos fácticos esenciales.

En primer lugar, debe presentarse la solicitud de amparo de pobreza de manera personal, afirmando bajo juramento que está en las condiciones previstas en el artículo 151 del Código General del Proceso. En otras palabras, la persona interesada debe presentar una petición formal y juramentada ante el juez competente.

Así lo ha señalado esta Corporación al precisar que el amparo pobreza tiene una naturaleza personal, es decir, que su reconocimiento no puede tramitarse de manera oficiosa por el funcionario judicial, sino que su procedencia, en específico, dependerá de la solicitud que haga la persona que no cuenta con la capacidad económica sufragar los gastos del proceso, constituyéndose en una carga procesal para la parte o el interviniente que pretenda beneficiarse de esta institución.

En segundo término, este beneficio no puede otorgarse a todas las personas que de manera indiscriminada lo soliciten, sino únicamente a aquellas que reúnan objetivamente las condiciones para su reconocimiento, a saber, que soliciten de forma personal y motivada el amparo, y acrediten la situación socioeconómica que lo hace procedente.”

En mérito de lo expuesto se,

RESUELVE:

PRIMERO: Admítase la anterior demanda verbal de RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL de MENOR CUANTIA, impetrada por **NELLY GONZALEZ NAVARRO**, a través de Apoderada Judicial; en contra de la sociedad **BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A.**, identificada con el NIT No.800240882-0, representada legalmente por GUZMAN ALDANA HERNAN FELIPE y el **BANCO BBVA COLOMBIA S.A.**, identificado con NIT No. 860.003.020-1 representado legalmente por el Dr. JORGE ALBERTO HERNANDEZ MERINO, con el propósito se declare el siniestro de la Póliza Seguro De Vida De Grupo Deudores No. 02-227-0000032395, que ampara el crédito No.0013-0158-00-9615168653, adquirido por la actora GONZALEZ NAVARRO, con el BANCO BBVA DE COLOMBIA S.A, lo anterior, con fundamento en que le fuera declarada incapacidad total y permanente.

SEGUNDO: Tramítase mediante proceso Verbal, consagrado en el Libro III, Capítulo I, artículos 368 al 373 del C.G.P.

TERCERO: Córrasele traslado a la demandada por el término de veinte (20) días para que la conteste.

CUARTO: Notifíquese este proveído conforme lo establece el artículo 290 del C.G.P. artículo 8 Decreto 806 de 2020. Entréguensele copia de la demanda y sus anexos.

QUINTO: Archívese copia de la demanda.

SEXTO: Deniéguese la procedencia del Amparo de Pobreza, invocado por NELLY GONZALEZ NAVARRO, por las extractadas consideraciones plasmadas en la parte motiva de esta providencia.

SEPTIMO: Téngase a la abogada **CIRA PATRICIA CORRALES ROMERO** identificada con la cédula de ciudadanía No. 64.583.314 expedida en Sincelejo-Sucre, y, T. P. No. 128.663 del C. S. de la J., como Representante Legal de Sociedad **DEFENSORY S.A.S.**, quien actúa como mandataria judicial de la señora NELLY GONZALEZ NAVARRO, en los términos y para los efectos a que se contrae el poder conferido.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ESTADO No. 59 FECHA: 10-05-21 SECRETARÍA
--

Firmado Por:

**RICARDO JULIO RICARDO MONTALVO
JUEZ MUNICIPAL
JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE SINCELEJO**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

1f65113fa34183639741da0d04ebdc1c3f494c01ec23fb820c1fc9ce1449ae49

Documento generado en 07/05/2021 10:20:58 AM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**